



Una vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.

El presidente Obama con su consejero para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga. Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice.

El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la riqueza nacional.

Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de

Escrito por Thierry Meyssan

Lunes, 30 de Marzo de 2015 08:31

febrero.

La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.

Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.

Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.

Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.

Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.

La cabeza militar

La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).

Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los “putchistas” había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.

Varios oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el orden en el país. También estaba previsto que suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacional y redactado por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María Corina Machado.

El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a sus principales cómplices extranjeros.

María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los servicios del publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente destituida de su cargo de diputada por haber violado así los artículos 149 y 191 de la Constitución de Venezuela.

Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.

Escrito por Thierry Meyssan

Lunes, 30 de Marzo de 2015 08:31

¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.

Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la “Operación Jericó”. En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente del Mossad fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski. El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión denunciando a los conspiradores [1]. Mientras tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de Macedonia, al declarar: “Esas acusaciones, como todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la grave situación que está confrontando.”

Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra de la democracia?

Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la “Operación Jericó” es un obligado tema de reflexión.

Estados Unidos contra Venezuela

En 2002, Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías [2] y posteriormente asesinó al juez venezolano a cargo de la

investigación, Danilo Anderson [3].

En 2007, Estados Unidos intentó un cambio de régimen organizando en Venezuela una «revolución de color» con la participación de grupos trotskistas [4].

En 2014, Estados Unidos pareció renunciar a su objetivo y respaldó grupos anarquistas que realizaron innumerables actos vandálicos para desestabilizar Venezuela, lo que los venezolanos llaman la Guarimba [5].

RED VOLTAIRE

[1] «Denuncia de Nicolás Maduro sobre nueva intentona golpista en Venezuela», Red Voltaire, 12 de febrero de 2015.

[2] «Implicación de las redes secretas de la CIA para derribar a Chávez», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de mayo de 2002.

[3] «Nuestro amigo Danilo Anderson asesinado en Caracas», «¿La CIA detrás del asesinato de Danilo Anderson? », por Marcelo Larrea, Red Voltaire, 20 de noviembre y 20 de noviembre de 2004. “FBI and CIA identified as helping Plan Venezuelan Prosecutor’s Murder”, por Alessandro Parma, Voltaire Network, 11 de noviembre de 2005.

[4] «Venezuela: conclusion d’une année déterminante», por Romain Migus, Réseau Voltaire, 10 de octubre de 2008. Ver también la respuesta de Gene Sharp a nuestras acusaciones: « La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 10 de febrero de 2005.

[5] «Estados Unidos contra Venezuela: la guerra fría se calienta», por Nil Nikandrov, Strategic Culture Foundation, Red Voltaire, 12 de marzo de 2014. «Las “guarimbas” de Venezuela: derecha embozada», por Martín Esparza Flores, Contralínea (México), Red Voltaire , 28 de abril de 2014.

RED VOLTAIRE